

[iPacific Rubiales no es Colombia!](#)

27 Junio, 2015

Categoría: [Articulos](#)

Escrito por [Alirio Córdoba, Guerrillero del Bloque Martín Caballero de las FARC-EP](#)

Operación Pacific Rubiales es un documental de Bladimir Sánchez Espitia, que relata las desgracias que viven indígenas, campesinos, obreros, en el Campo petrolero Rubiales (municipio de Puerto Gaitán-Meta), como consecuencia de la acción criminal de la multinacional Pacific Rubiales Energy, empresa que ocupa el segundo lugar en explotación petrolera en Colombia después de Ecopetrol.

Por estos días que la empresa ha puesto en venta el total de sus acciones en la bolsa de Canadá (cien millones de acciones con las que aspira obtener 5 mil millones de dólares), resulta oportuno mostrar la verdadera cara de este vampiro petrolero que en Colombia goza de todas las licencias y gabelas para vulnerar derechos ambientales, sociales y laborales con la complicidad del Estado. En este sentido, el documental es indiscutiblemente un excelente material de denuncia.

EL PREAMBULO

“Todo iba muy bien hasta cuando aparecen las empresas petroleras; ahí empieza las desgracias que derrumban nuestro proyecto de, vida, por el trauma psicológico y los daños que causan”, comentan los habitantes de la vereda Rubiales. En 2006, paramilitares de Víctor Carranza declararon una guerra a muerte a los habitantes de Puerto Gaitán para desalojarlos de sus tierras, Coincidentalmente en la misma época la multinacional inicia sus operaciones en la zona.

El testimonio del jefe paramilitar Héctor Buitrago, revela cómo en sociedad con el actual alcalde de Puerto Gaitán Edgar Silva, sometieron a los indígenas Sikuane a desplazamientos forzados, torturas y trabajos forzados, dentro de un plan de alistamiento del territorio a favor del proyecto petrolero. Esta ha sido la constante donde multinacionales mineras y agroindustriales vienen operando en el territorio nacional.

El paramilitarismo no es cosa del pasado, las bandas paramilitares siguen actuando con las manos sueltas en estas zonas, asociados a la seguridad de la empresa, la policía y el ejército.

DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES

En la actualidad, la vereda Rubiales es un campo de concentración controlado por la empresa con el apoyo de dos batallones energéticos que restringen el tránsito de la comunidad y el ingreso de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, con el objeto de impedir que se conozca la tragedia humanitaria que se vive en el campo petrolero. El congresista Alexander López lo define como “un territorio vedado para los colombianos”.

Por la contaminación de las aguas producida por el vertimiento de crudo en caños, nacimientos y humedales, la población campesina e indígena vive en condiciones ambientales y alimenticias precarias. Por defender el derecho al agua, al ambiente sano, líderes como Amanda Orozco y su hija han sido amenazadas, en tanto que otros líderes han sido asesinados.

Voceros indígenas del resguardo El Tigre, denuncian que la Multinacional “Promete y nunca le cumple a las comunidades” que “nunca llevaron a cabo entre las comunidades una consulta” sobre las condiciones y conveniencias de la explotación petrolera en sus territorios ancestrales. Que han invertido importante sumas de dinero para comprar a los líderes indígenas y desactivar sus manifestaciones de protestas.

En Puerto Gaitán los niños indígenas mueren de hambre. El documental muestra a un hombre de unos 50 años, acompañado de dos niños, uno es su hijo, el otro el nieto, provenientes de un resguardos cercano, que llega a las afueras de la multinacional con tres flechas y un arco, abrigando la esperanza de que alguien se los compre, “pa compra panela para comer”. El hombre hace una desesperada suplica: “No tenemos comida, estamos aguantando hambre. Yo quiero pedir un favor pa que me hagan colaboración”.

Para cualquier colombiano con un mínimo sentimiento de patria, esas imágenes deben despertar la indignación y el ánimo de lucha; estas actuaciones desbordadas del capital extranjero en nuestro país con la complicidad de la clase gobernante, este es el resultado de la “confianza inversionista” institucionalizada por Uribe y Santos.

CONFIANZA INVERSIONISTA VS. DERECHOS LABORALES

La “Confianza inversionista” va unida a la “flexibilidad laboral” impuesta por el mundialmente fracasado modelo neoliberal. Bajo esta receta los empresarios promueven masacres laborales, amparados por leyes laborales cómplices. 12 mil trabajadores tercerizados, entre ellos 3.300 obreros afiliados a la USO, fueron despedidos por la empresa entre 2011 y 2012, sin ninguna indemnización, a través de una campaña orquestada por Pacific y sus contratistas, denuncian los dirigentes sindicales Camilo Acero y Campo Elías Ortiz.

Al interior de la empresa rigen normas mediante las cuales se prohíbe que indígenas y blancos estén en contacto, por “medidas de seguridad”; normas que obstaculizan el ejercicio del derecho sindical. Una maya enorme impide el paso de los dirigentes sindicales, imposibilitando la información y el contacto entre los afiliados y la dirigencia de la USO. Los dirigentes son hostigados, amenazados por el ejército y la empresa privada “seguridad física”, tal como denuncia Héctor Sánchez, defensor de derechos sindicales, humanos y ambientales y vicepresidente de la vereda Rubiales.

Campo Elías Ortiz, defensor de los derechos de los trabajadores, denuncia que el 24 de octubre de 2012, nueve unidades de la policía contraguerrilla al mando del mayor Cesar Pimienta, intentaron desaparecerlo.

EL PRONTUARIO

Parte de las acciones de Pacific son propiedad de empresarios venezolanos vinculados al intento golpista y al paro petrolero de 2002 contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez. En la actualidad el gobierno de Nicolás Maduro los acusa de facilitar la compra de armas para la oposición venezolana, cuya “hazaña” más reciente fue el asesinato de varios ciudadanos de éste país en las “guarimbas” de 2014.

Según el documental, otros accionistas de Pacific mantienen relaciones con traficantes de armas, han participado de desfalcos en países como Grecia; participan en especulación financiera a través de acciones en la bolsa de valores de Canadá, país de origen de uno de sus principales propietarios, FRANK IUSTRAK, quien según el analista Mario Valencia del Centro de Estudios del trabajo, es socio de la familia Clinton y “tiene dentro de su círculo de poder a ex-funcionarios del gobierno de Uribe como la ex-canciller María Consuelo Araujo”.

Para lavar la imagen que deja su senda criminal en Campo Rubiales, la multinacional Pacific Rubiales Energy, ha desatado en los últimos años una intensa campaña publicitaria, invirtiendo según el periodista Hector Rodriguez, más de 15 millones de dólares en publicidad en los más grandes medios de comunicaciones colombianos, promoviendo la consigna “Pacific Rubiales es Colombia”. La multinacional además ha comprado el 10% del diario El Tiempo, el 39% de Cable Noticias. Aun así, el país sabe que Pacific Rubiales NO es Colombia.

Manuel Vega docente investigador de la Universidad Externado propone iniciar un debate con las siguientes preguntas: ¿el modelo petrolero es el modelo que nos sirve para la sostenibilidad del planeta? ¿Los daños ocasionados por la explotación petrolera se pueden reparar? ¿Hay otro recurso energético que no sea tan costoso para el planeta y para la vida de los seres humanos?

Las preguntas del profesor Vega son las mismas que las FARC-EP hemos formulado durante la discusión del primer punto de la agenda, acompañadas de propuestas que cambiarían el rumbo de la política minero-energética que se viene implementando en Colombia, con consecuencias sociales y ambientales desastrosas. Hasta ahora nuestras preguntas y propuestas siguen en el congelador bajo la denominación de “pendientes” o salvedades; Estos temas deben ser retomados en la discusión y los acuerdos que puedan salir de la mesa de diálogos de La Habana.